

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Apelación auto

Exp. 05001-31-05-026-2023-00101-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por GLADIS ELENA MONSALVE SÁNCHEZ, frente al auto que negó el decreto de una prueba, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta GLORIA STELLA LONDOÑO URIBE en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A., con vinculación de la recurrente, quien actúa como interviniente excluyente.

ANTECEDENTES:

La demandante puso en marcha este proceso, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes por virtud de la muerte de su cónyuge Juan Manuel García Sánchez, oportunidad en la que citó como interviniente excluyente a Gladis Elena Monsalve, por concurrir a la AFP demandada a solicitar igual prestación económica.

Dentro del escrito de intervención de parte de Gladis Elena Monsalve Sánchez se solicitó como prueba, entre otras, el “*interrogatorio de parte*” de la “*interveniente*” y en audiencia que se celebró el 12 de marzo de 2024 el Juzgado de Conocimiento, que lo es el Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín, decidió negar tal medio probatorio, aduciendo haber quedado mal formulado y peticionado, una vez la apoderada aclaró que la intención era acudir al interrogatorio de parte de la accionante, dilucidando que la imprecisión se debió a que la interviniente en principio había formulado

demanda ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín donde la interviniente era la demandante en este proceso, presentándose un error mecanográfico al momento de pronunciarse dentro de este trámite como tercero llamado al trámite. El Juez se mantuvo en la posición de negar tal medio de convicción aunado a que Protección solicitó en debida forma el interrogatorio de parte de ambas solicitantes.

La parte a quien no se le decretó el interrogatorio de parte pedido se apartó de la decisión con interposición del recurso de reposición y, en subsidio suyo, el de apelación, aduciendo que si bien las partes deben actuar de manera acuciosa, el Juez dentro de las facultades que tiene, con la decisión que adopta muestra un exceso de ritual manifiesto, porque teniendo en cuenta que cuando se solicita que sea su misma parte que declare se trata de una declaración de parte y cuando es la contraparte, se pide un interrogatorio, la parte interviniente de forma transparente explicó que se incurrió en un error en cuanto a la denominación en la que actúa la parte, no siendo ello óbice para que se sacrifique el fondo del proceso, insistiendo en que el error ocurrió por la demanda inicial que se había radicado con conocimiento del Juzgado 11, y ya siendo interviniente en el presente se dejó la demanda con el error mecanográfico del interrogatorio de parte a la interviniente que claramente era Gloria Stella Londoño, pero claramente lo pedido es el interrogatorio de parte de la demandante y no la declaración de parte como interviniente y con el decreto en favor de Protección no le confiere el derecho de interrogarla.

El juez decidió sostenerse en su determinación, señalando la importancia desde la profundidad procesal de formular dentro de las etapas procesales la estrategia probatoria, cuyos cambios intempestivos pudieran resultar inconvenientes para la contraparte que estaba convencida de que lo pedido en este caso, era la declaración de parte de la misma interviniente y no el interrogatorio de parte de la demandante, aclaración con la que se sorprende a la parte y puede transgredir en ese orden la posibilidad de programar una defensa técnica, esbozando que de permitir lo planteado, da lugar a consentirlo a la contraparte, siendo acostumbrado por el Despacho dar equilibrio a las partes, por lo que como en la forma como fue pedida la prueba, el interrogatorio de parte a la demandante no fue solicitado, no repuso su decisión, concediendo el recurso de apelación formulado en efecto devolutivo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto recurrido se encuentra regulado en el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS. Luego, y a partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si debe revocarse la determinación del *a quo* de no decretar el interrogatorio de parte pedido por la llamada a juicio como interviniente excluyente.

Pues bien, la jurisprudencia ha establecido que las formalidades adjetivas tienen fundamento en los artículos 29 y 228 de la C.P, que prevén no solo la garantía del derecho al debido proceso y de acceso efectivo y real a la administración de justicia, sino que además establecen el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, por lo que se ha interpretado que las normas procesales constituyen “*un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos*”, pero no son fines en sí mismas y por tanto, no pueden constituirse en una barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial, señalándose que en estos casos debe procurarse brindar un equilibrio entre las formas propias del juicio pero preservando ese derecho sustancial.

Claramente, lo previo no implica que el juez o las partes puedan apartarse caprichosamente de las reglas procesales, ya que en principio son de obligatoria observancia al integrar disposición de orden público y por tanto de estricto cumplimiento; sin embargo, su interpretación de cara a cada situación específica puede ser irreflexiva cuando se afectan garantías fundamentales en contravía de la Constitución Política, existiendo en ese orden situaciones excepcionales en las que los funcionarios deben armonizar el compendio procesal con los principios de tipo constitucional, siendo posible medir el estricto acatamiento del canon procedimental cuando obstaculiza la materialización de un derecho sustancial (Ver SU041-2022).

En ese contexto, se tiene que el interrogatorio de parte negado, lo fue por detallar en la solicitud que iba encaminado a la interviniente, pese a ser la

misma interviniente quien requería la prueba, entendiendo el Juez que lo buscado era una declaración de parte, sin permitir luego de la aclaración de la apoderada respecto a su intención de interrogar a la demandante y las razones del yerro, que tal prueba fuera concretada por ser pedida de manera desacertada. Al respecto, considera esta Sala de decisión, que se está dando aplicación con extremo rigor a una normativa procedimental, pues si bien la defensa técnica es una garantía del debido proceso y por respeto a los intervinientes del proceso debe darse una correcta enunciación probatoria para darse la preparación debida sin sorpresas de este tipo; teniendo en cuenta que lo buscado con esta probanza es la confesión de parte de quien persigue de lado de la solicitante una prestación económica por muerte, denegar la posibilidad de su práctica acorta la probabilidad de arribar a una verdad jurídica, y limita a la interviniente las herramientas con las que cuenta para materializar el derecho que busca, sin que con el interrogatorio que se decretó en favor de Protección S.A. se supla el negado, puesto que concurren diferentes intereses, y recae en otro mandatario la carga de lograr la confesión de parte de la interrogada. En cambio, con el decreto de esta prueba no se visualiza una amenaza, vulneración o irrespeto al debido proceso de la contraparte, ni se nota un desequilibrio en el aspecto probatorio, permitiéndose un desenvolvimiento del trámite con todas las garantías propias de un juicio para todas las partes, sin que ello resulte abiertamente incompatible con la Constitución o con la ley, observándose que, lejos de una conducta negligente de parte de la interviniente, se mira un error mecanográfico que en consideración de esta colegiatura no tiene la entidad de frustrar su práctica, ni de contrariar garantías fundamentales de cara a la formalidad procesal que se halló insatisfecha.

Así, como la finalidad o propósito de cualquier régimen probatorio no es otro que el de infundir certeza al juez sobre unos hechos determinados, para alcanzar este objetivo, mal pudiera negarse un interrogatorio de parte que tiene la viabilidad de brindar información de gran trascendencia al proceso, por estarse sujeto a una ritualidad procesal cuya flexibilización no afecta bajo ningún panorama la defensa técnica de ninguna de las partes, siendo preciso anotar que el rechazo de plano de una prueba sólo procede cuando se trata de una ilícita, notoriamente impertinente e inconducente, o manifiestamente superflua o inútil, condición de la que no participa la prueba denegada, en los términos del artículo 168 del CGP, razones que conllevan a que la decisión


apelada sea revocada, para en su lugar, decretar el interrogatorio de parte de la señora Gloria Stella Londoño a cargo de la Interviniente excluyente.

Sin costas por la prosperidad del recurso.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, ordena el decreto y práctica del interrogatorio de parte de Gloria Stella Londoño a cargo de la interviniente excluyente. Sin costas.


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 078 fijados el 8 de mayo de 2024, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.